

Nota de coyuntura

La izquierda y los quince años de la transición en Brasil¹

Luiz Werneck Vianna

LA HISTORIA DE LA COALICIÓN POLÍTICA que en el año 1985 se impuso al régimen militar al autoritarismo de Estado en Brasil puede ser entendida como el resultado de la asociación, inédita en el país, de los temas y personajes de la democracia política con los de la democracia social. O, en otras palabras, de la libertad con la igualdad. Sin embargo, también es posible constatar, a partir de 1982, cuando las fuerzas que se enfrentaban al régimen autoritario ganaron los gobiernos de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco y Río de Janeiro, que los triunfos de esa coalición, lejos de afianzar la asociación que la fundamentaba, ya contenían en sí los elementos que provocarían su separación. De esa manera, antes de que pudiera dar por concluida su obra, la coalición que había resistido al autoritarismo y que había marcado los rumbos de su superación llegaría al rompimiento.

La separación entre las dinámicas de la libertad y de la igualdad no fue el resultado de un proceso fortuito, sino que puede ser explicada a partir de varios cambios desencadenados, aún bajo el régimen militar, en los ámbitos de las ideas, de la estructura social y de la orientación de los movimientos sociales; principalmente de aquellos de reciente organización, que se debían a las propias transformaciones introducidas por el ciclo de modernización que se iniciara en los años posteriores a 1964.

¹ Artículo elaborado en febrero de 2000 en el marco de las actividades desarrolladas en la Cátedra Florestan Fernandes de Estudios de Historia y Sociedad en Brasil, El Colegio de México/Embajada de Brasil en México.

En cuanto a las ideas, la transformación se dio en la percepción del Estado y del ámbito público del país, factores que desde la revolución del año 1930² habían sido considerados estratégicos para la modernización y la democratización del país y que ahora comenzaron a ser vistos como obstáculos al libre desarrollo de la sociedad, especialmente como espacios institucionales de reproducción de los patrones jerárquicos y socialmente injustos que predominan en la historia del país. Esa nueva interpretación de Brasil, gestada durante el momento más represivo del régimen autoritario —los años setenta—, encontró su base intelectual en la recepción que la obra weberiana había tenido en algunos círculos académicos, y que a partir de allí, influyera en la acción de grupos y personalidades de izquierda.

Las versiones de esa interpretación, algunas de ellas de motivación radicalmente distinta, tenían en común la misma y definitiva prescripción para enfrentar la *malaise* brasileña: liberar el interés de la jurisdicción política del Estado y hacer de él y de su libre manifestación el eje regenerador de la sociedad y de sus instituciones políticas. No en balde en la bibliografía producida con esa inspiración, tanto en el ámbito liberal como en el democrático-radical, el estado de São Paulo aparece como el portador potencial de un nuevo paradigma —basado para unos en la representación y en la cooptación, y para otros en la clase, y no en el pueblo— que al afirmarse pondría fin al largo periodo de supremacía del Estado sobre la sociedad civil.

A finales de los años sesenta y durante la década siguiente las versiones de esa interpretación de Brasil tuvieron dos vertientes: la que tomó al Estado como su punto de partida, concibiéndolo como el portador de la herencia patrimonial portuguesa y en esa medida, como raíz del atraso brasileño, y la que de manera alternativa encontró en las dinámicas sociales derivadas del exclusivo poder agrario en la historia de Brasil la vigencia del patrimonialismo. Como puede apreciarse, en ambas vertientes el patrimonialismo era la categoría explicativa clave del rezago brasileño y de la peculiar combinación de atraso y modernidad que había presidido la modernización burguesa autoritaria.

Así, a pesar de las diferencias entre esas interpretaciones, resaltadas desde el origen por la elección del punto de partida —el Estado en una, la sociedad en otra—, el diagnóstico en torno a la patología de la modernización brasileña encontraba una misma matriz explicativa: la subordinación del interés de las clases sociales a una esfera pública a la que se veía aislada,

² Movimiento cívico-militar de vagas inspiraciones modernizantes encabezado por Getúlio Vargas que puso fin a la llamada "República Vieja" implantada en 1889, con el fin del imperio. [N. del T.]

contrapuesta a la sociedad civil, y orientada en última instancia hacia el beneficio de los intereses propios de las élites que la controlaban. La capacidad persuasiva de ese diagnóstico se veía reforzada por la naturaleza de las relaciones establecidas entre el Estado y la sociedad civil en el contexto del régimen militar, consideradas como la consecuencia de la mala formación histórica del país.

Entonces, democratizar Brasil implicaría un movimiento de ruptura con su historia, liberando el interés y las agencias especializadas en su representación —sindicatos y partidos políticos— de sus articulaciones con el Estado, considerado como el mayor responsable de la situación de heteronomía de las clases sociales, el cual, con la utilización de los instrumentos de la dominación populista, había convertido a la clase obrera en un “personaje estatal”. El populismo, ejercido bajo una indumentaria nacional-popular, consistiría pues en un recurso político de las élites dominantes para subordinar la agenda del sindicalismo obrero a sus propios fines, esto es, a la modernización del orden burgués, impidiéndole considerar la pauta de reivindicaciones que lo constituía y evitando que la clase obrera se tornara sujeto de su propia historia. Desde ese punto de vista, la autonomía de la clase obrera dependería de la construcción de su identidad a partir de sus intereses, lejos de las alianzas con clases o fracciones de clase dominantes y con “su” Estado. Para los obreros el acceso al ámbito público debía ser consecuencia de la acumulación de fuerzas y resultar de un acto de conquista, no de alianzas pluriclasistas, en un movimiento de abajo hacia arriba, nacido del territorio libre de la sociedad civil. En otras palabras, la política del movimiento obrero y sindical debería consistir en una derivación de su “sociología”, sobre todo de su forma de insertarse en el espacio fabril.

Es, entonces, con base en esas premisas que se inaugura la revisión de las interpretaciones acerca de la formación del Brasil moderno, uno de cuyos principales objetivos es descalificar la tendencia republicana del movimiento obrero y sindical durante el periodo que comprende los años 1946 a 1964, basado en la afirmación del interés público sobre el privado. Ese republicanismo, que lo habría llevado a concretar alianzas con sectores de las élites a favor de la industrialización del país, no sólo habría sido responsable del desastre del año 1964, sino que también explicaría la situación de heteronomía prevaleciente en la condición social de los personajes subalternos. Así como la adhesión al sistema de orientación republicano explicaría la derrota del movimiento democrático-popular, pues lo había atrapado en las redes de la dominación burguesa durante el régimen del nacional-populismo, así también la liberación del interés auténticamente clasista debería ser la base fundadora de una acción emancipadora de los sectores subalternos.

A mediados de la década de los años 70, y coincidiendo por lo tanto con esa alteración del acervo interpretativo acerca de la historia reciente del país, la vida social comenzaba a presentar algunos cambios derivados de la emergencia de nuevos movimientos organizados, en particular aquellos que se originaban en el ciclo de industrialización provocado por el establecimiento del parque automovilístico en la región del ABC de São Paulo.³ De allí saldría el “nuevo sindicalismo”, nacido de una industria privada multinacional y de un contexto completamente diferente del que prevalecía al inicio de los años sesenta, y, por lo tanto, sin haber sido objeto de una exposición efectiva a la agenda republicana. Discontinuo desde el punto de vista de su extracción social y política con relación al sindicalismo anterior, cuya mejor representación se forjaba en las empresas estatales, el “nuevo sindicalismo”, como la “nueva interpretación” en torno a la formación brasileña, surge también en oposición a la historia de las alianzas obreras y a la noción, hasta entonces prevaleciente, de que las razones de la política debían estar presentes en la manifestación de su interés. Por el contrario, su mundo es el del mercado, de la fábrica, de la negociación del salario y las condiciones de trabajo, y no el de la república.

Son esos dos movimientos independientes entre sí —que proceden, uno, de las concepciones ideales, y el otro, de los movimientos sociales—; generados sin embargo durante la misma circunstancia histórica, los que, a pesar de sus diferentes inspiraciones y motivaciones, habrán de conocer en el paso de la década de los años setenta a la siguiente el camino para hacer explícitas sus afinidades electivas, al instituir la dimensión del interés como la base para la democratización del país. Elemento intrínsecamente emancipador, el interés no debería estar sometido a otras formas de razón, como la de la política. Además, al ser él la expresión por excelencia de lo social y de los imperativos para la formación de una conciencia popular autónoma, la condición para que pudiera operar la regeneración de una sociedad autocrática y desigual como la brasileña residiría en el radicalismo sin trabas de su manifestación.

A partir de allí se abre, pues, una coyuntura marcada por la disociación progresiva de los operadores políticos y los sociales. Mientras la política de la transición efectuaba un amplio movimiento de notación republicana, tratando de condicionar la agenda de la democracia social a la jurisdicción de la razón y del cálculo propiamente políticos, en el ámbito de la intervención social la comunión de la *intelligentzia* con los movimientos organizados ampliaba la influencia de otro sistema de orientación. En esa lógica doble y

³ Se refiere a los municipios de Santo Amaro, São Bernardo y São Caetano, periféricos a la ciudad de São Paulo. [N. del T.]

contradictoria, cuanto más se avanzaba en el proceso de transición, mayor era la división en el campo de las fuerzas democráticas, lo que las condujo a presentarse divididas a la sucesión presidencial de 1989 —la democracia política representada por la candidatura de Ulysses Guimarães; la democracia social por la de Luiz Inácio Lula da Silva—. Esa división permitió la victoria electoral de Collor, y con ella la transferencia del gobierno al control de personajes, clases y fracciones de clase no sólo beneficiarios de la política del antiguo régimen, sino también responsables, en buena medida, de su sustentación social.

El melancólico desenlace de la sucesión presidencial de 1989, reiterado en las dos sucesiones siguientes, puso en evidencia que la disociación entre la democracia política y la democracia social hacía de la primera un institucionalismo sin sustancia y condenaba a la segunda, no obstante la fuerza de su voz, al aislamiento político. Dicha disociación resultaba, en último análisis, de la convicción de que la democratización efectiva del país implicaba el abandono de la transición en beneficio de la estrategia de ruptura. La perspectiva de la ruptura, fortalecida a partir de los años ochenta, no constituía en realidad un movimiento sin vínculos con la historia de la resistencia al régimen militar. De cierta manera en aquel nuevo escenario y con otros personajes sociales —aunque algunos de los liderazgos políticos y los miembros de la *intelligentzia* fueran los mismos— ella reavivaba la contraposición entre la estrategia de la “derrota” y la del “derrumbe” que había dividido a la izquierda en los días subsiguientes al golpe militar. Por eso se puede argumentar que desde entonces, como ahora, los sucesos recientes de la transición brasileña a la democracia sugieren como un elemento esencial la cuestión del sistema de orientación del actor.

Como es notorio, desde inicios del régimen militar la estrategia de la *derrota* fue difundida hacia la izquierda por el Partido Comunista Brasileño (PCB), y encontró su expresión más general en la movilización del inventario político de Occidente, en especial las libertades civiles y públicas y las instituciones de la democracia representativa. Se trataba de una orientación que buscaba de manera preferencial llegar a los sectores más modernos de la estructura social y a los estados más desarrollados de la Federación. Así, ante la clásica disyuntiva que animaba las controversias de los sectores de izquierda sobre las ventajas de lo moderno y las del atraso, su opción clara era por las primeras, mientras que la alternativa que se le oponía manifestaba sus preferencias por las últimas, especialmente porque vivía en la expectativa de una movilización revolucionaria del campesinado.

Desde el punto de vista analítico, la estrategia de la *derrota* se fundamentaba en el diagnóstico del doble carácter del régimen autoritario, que

combinaría una forma de dominio autocrático manifestado en los Actos Inconstitucionales⁴ con otra que resultaba de la preservación, al menos como fachada e instrumento de legitimación democrática, del orden racional-legal. Al entender que tal ambigüedad sería intrínseca a ese tipo de régimen autoritario, la estrategia de la *derrota* se empeñaba en fortalecer la dimensión “constitucional” remanente con el fin de aislar y después cancelar la dimensión “institucional” del régimen. El riesgo de la operación residía en la posibilidad de que tal estrategia viniera a confirmar los esfuerzos de legitimación del régimen militar y a capacitarlo para el ejercicio de la coerción más brutal bajo el disfraz protector de las instituciones de la democracia representativa. Evitar el riesgo implicaba una asociación fuerte y creciente de la agenda de la democracia política con la cuestión social, como sucediera en 1974 cuando esa combinación llevó a la oposición democrática por primera vez a la victoria electoral en la disputa mayoritaria por escaños en el Senado. A partir de entonces vinieron el estrechamiento de las relaciones entre el centro político y la izquierda, la incorporación de la gran intelectualidad paulista y del “nuevo sindicalismo” del ABC a la estrategia de la *derrota*, y la confirmación de la importancia de la vía electoral como forma de lucha contra el régimen autoritario, con la superación por amplio margen de la práctica de anulación del voto, que había salido victoriosa en las elecciones de 1970.

En el campo de la izquierda, el resultado electoral de 1974 consagró la supremacía del sistema de orientación de la *derrota* sobre el *derrumbe*, lo que traería consigo algunos efectos agregados, no todos anticipados por los actores involucrados, ni siquiera por aquellos que más se habían empeñado en su formulación y práctica. Es que profundizar la estrategia de la *derrota* significaba admitir un movimiento hacia la democracia que no constituía necesariamente un momento fuerte y agonístico de ruptura con el antiguo régimen —lo que en el lenguaje de la izquierda quería decir adherirse a la vía de la reforma en detrimento de la revolución—. Por lo tanto, el asumir el camino de la transición entrañaba para la izquierda transformaciones de su identidad y de su trayectoria tradicional que le harían identificarse plenamente con los valores y las instituciones de la democracia —incluida ahí la tradición liberal—, rechazar viejas antinomias —entre igualdad formal e igualdad real, por ejemplo—, y darle el mismo estatuto a los valores de la libertad y de la igualdad.

Por eso para ella la transición denotaba un alejamiento del modelo clásico de revolución dominado por el tema de la destrucción del aparato del

⁴ El autor hace aquí un juego de palabras con los Actos Institucionales (*Atos Institucionais*), en los que se concretó la legislación autoritaria e inconstitucional de los gobiernos militares. [N. del T.]

Estado, y reclamaba la revisión de sus conceptos, valores, sistema de orientación y modos de comprender la historia del país, de manera que fuera posible erigir la democracia, sus instituciones y procedimientos en un estado permanente de cambio social. En ese sentido es innegable que la transición significaba admitir una solución de transformismo, una vez que por definición equivalía a negarle a la vía de ruptura su carácter de condición para la institucionalización de la democracia en el país. Sería tarea del actor identificado con el proceso de la transición alterar el registro de la solución transformista, dándole por medio de su actividad como un “político realista y no [como] un apóstol iluminado” —para usar las palabras de Gramsci en sus análisis del *Risorgimento*—, la dinámica en la que el cambio se impusiera a la conservación.

En esas condiciones, asumir la política de transición y no sólo unirse a ella por un cálculo político de valor contingente presuponía un cambio en la forma de actuar y en la propia identidad del actor, bajo pena de convertirse en un extraño a su propia creación, incapaz de continuar actuando positivamente en ella, como le ocurriría al PCB. Ser homólogo al proceso que desataría significaba, pues, acompañar inclusive en el ámbito de la teoría lo que le era propio, por ejemplo las drásticas transformaciones por las que pasaba el campo semántico de la izquierda, demostradas con el abandono progresivo de la categoría *clase* a favor de la categoría *ciudadano*.

El caso del PCB es ilustrativo, ya que entre las fuerzas de izquierda fue el mayor responsable por la afirmación de la estrategia de la *derrota*. Sin embargo, el triunfo político que se le atribuye por eso en la historia de la resistencia al autoritarismo no evitó que conforme la democratización avanzaba se convirtiera en un partido minoritario al interior de la izquierda, destituido de bases en la vida popular y —algo inédito en su trayectoria—, en el movimiento obrero y sindical. En efecto, si se toma en cuenta la naturaleza de su identidad tradicional, su afiliación al canon de la ortodoxia soviética, con sus concepciones verticalizantes y la noción teológica de un “centro único”, nada podría ser más amenazador que el *aggiornamento* a la coyuntura de la transición, que por otra parte resultaba ininteligible sin su participación.

Por eso cuando se hacen evidentes las no homologías entre la práctica que efectivamente se ejercía, su vieja teoría y su identidad de grupo, el PCB comienza a entender la transición como una variante táctica y no como una política de larga duración, destinada simplemente a devolverle al país las condiciones de la libertad democrática. A partir de los años ochenta, amenazado por su propia criatura, el PCB comenzaría a vivir una lógica dual y contradictoria: por un lado, sin denunciar el camino de la transición se negaría a credenciarse para su dirección y se entregaría a él como a un flujo regido por

la providencia; por el otro, iniciaría un movimiento de restauración de su identidad, un regreso al pre-64 tendiente a revitalizar, sintomáticamente, la cuestión democrática, básica para la eficacia política de una izquierda que encontrara atractivos en la vía de la transición. Con eso comprometería su capacidad de interpretar los movimientos sociales emergentes y perdía la sintonía con los movimientos libertarios de la cultura política evidenciados con el proceso de democratización.

El 7º Congreso del PCB, convocado en mayo del año 1981 para deliberar acerca del documento titulado “Tesis para un debate nacional de comunistas por la legalidad del PCB”, constituye el ejemplo del espíritu de regreso, entonces dominante en su dirección. El retorno de las libertades que se esperaba en breve, y la historia de las luchas que se asociaba a ellas, no serían analizados desde el punto de vista de transformación de concepciones y de rumbos, sino desde la restauración esperada. En ese sentido el documento de la dirección del PCB, además de lo equivocado de las previsiones no necesariamente inocuas relativas a la formulación de las “Tesis”, como la que afirmaba que “el aumento del prestigio internacional de los países socialistas, la acelerada reducción de la influencia de Estados Unidos [estarían] provocando un rápido descenso de la burguesía imperialista en el mundo” (Sección I, Tesis 6), y se limitaba a re-presentar sus concepciones de la revolución nacional-popular. La Tesis 23, verdadera regresión a los años sesenta, al pretender exponer la naturaleza de la contradicción entre el pueblo y el imperialismo llega a sustentar, haciendo abstracción de los 17 años de modernización burguesa autoritaria por los cuales el país todavía navegaba, que

en la etapa actual de la revolución brasileña y de la transición al socialismo, le está reservado un importante papel al sector estatal de la economía, ampliado por la incorporación de otros sectores fundamentales, substraídos al imperialismo. Él ejercerá la función de núcleo más dinámico y acelerador de la economía y facilitará la transición al socialismo por el camino del desarrollo independiente, democrático y progresista (Sección 2, Tesis 23).

Así pues, es el canon identitario lo que aprisiona al PCB en su propia historia protegiéndolo de su política aun cuando ésta resulte exitosa, como es el caso de la que condujo el país al camino de la transición. Anclado en sus lealtades internas y externas, el PCB observa el curso de la transición indiferente al movimiento del mundo, sin darse cuenta de que su base de sustentación —el movimiento obrero y sindical— ya se apartó definitivamente de su influencia. De esa falta de comunicación entre un proceso —la apertura, la transición— y el principal actor que a la izquierda presidió su animación, saldrá el resultado paradójico que pondrá en manos de personajes y grupos políti-

eos originarios de la estrategia del *derrumbe* la misión de protagonizar la transición, y que hará que experimenten una progresiva adaptación de su naturaleza —movimiento aún en curso pero ya portador de conquistas prometedoras, como la revaloración, aunque tímida, del tema republicano y de la democracia como estrategia para el cambio social.

Como es sabido, fue el PT⁵ entre las fuerzas de la izquierda quien supo aprovechar la vía de la transición, haciendo del proceso electoral, como antes lo había hecho el PCB, su principal forma de lucha y de acumulación de fuerzas, al grado de que hoy ejerce el gobierno en tres estados de la federación y en 110 municipios, entre ellos dos capitales, además cuenta con una numerosa fracción de diputados y senadores. Sin embargo, a lo largo de la década de los años ochenta y hasta mediados de los noventa el PT fue un huésped del proceso de transición y trató de romper con él, no de dirigirlo. Por eso su rechazo en ese contexto al establecimiento de alianzas, o su alejamiento del Centro político y su inclinación por la agenda de lo social en detrimento de la republicana.

Hostil a la transición, el PT se presentaba como el mejor intérprete de los nuevos movimientos sociales y de la cultura política que emergían con la democratización del país, con lo cual obtenía la legitimidad necesaria para seguir buscando una solución de ruptura. De esa manera, desamparado por la izquierda que lo concibió y por aquella que nació en su propio seno, el proceso de transición va a contar tan sólo con el apoyo del Centro político, a esa altura reducido al mero discurso institucional y sin representación en el mundo de los intereses, inclusive entre los empresarios que ya buscaban deshacerse del peso histórico del ámbito público en sus actividades. Más adelante, en el año 1988, mal concluidos los trabajos de la Asamblea Constituyente, el Centro político no semeja en nada lo que había sido hasta antes de la transición.

En la sucesión presidencial del año 1989, en la cual los partidos de izquierda presentaron candidaturas propias, el candidato del Centro, Ulysses Guimarães, principal hombre de los liberales de tradición republicana, sólo obtuvo 6% de los votos y, no obstante el buen desempeño electoral de la izquierda, la derecha triunfó con Collor y le dio un desenlace inesperado a la transición. La ruptura no venía, pues, de la izquierda, sino del lado opuesto. El discurso de toma de posesión de Collor el 15 de marzo del año 1990, orgullosa declaración de principios del ideario neoliberal, significaba que la coronación de la transición tendría su momento culminante en la ruptura con la tradición republicana y con el tipo de valoración del ámbito público que

⁵ *Partido dos Trabalhadores*, fundado en 1979 por obreros del ABC liderados por Luiz Inácio Lula da Silva. [N. del T.]

ella representaba. La transición, que en la interpretación de la derecha aparecía limitada hasta entonces a la reconquista de la libertad política, habría llegado a su término con la instauración de la “más amplia y efectiva libertad económica” que el nuevo gobierno instrumentó.

Desde ese momento la “ruptura” pasó a ser la palabra clave de la derecha. Ya electo y antes de asumir la presidencia de la República, Fernando Henrique Cardoso, en su discurso de despedida del Senado, y dándole continuidad a la declaración de Collor, decretaba el fin de la era Vargas.⁶ La misma intención en esos dos momentos: el proceso de transición concluiría con la primacía de lo privado sobre lo público, disociado de una vez por todas de su impulso original en el cual había estado presente la tentativa de combinar los ideales de la democracia política con los de la democracia social.

Conquistado el Poder Ejecutivo, la derecha evidenció claramente que la transición era todavía un proceso en curso y denunció como ilusoria la creencia de muchos en el sentido de que con la promulgación de la Constitución de 1988 habría llegado el momento de su conclusión. Concluiría dependía de la acción del Ejecutivo, ahora bajo su control, que debería producir la reforma del Estado, la liberación del mercado de condicionantes externas a su lógica y, muy en especial, la reforma de la Constitución por medio de la intervención permanente que la volviera compatible con el que sería el carácter real del desenlace de la transición. De allí resulta que la derecha evidenció el carácter inacabado de la transición al contraponer a la Carta de 1988 —con sus instituciones arraigadas en la tradición republicana y en la valoración del ámbito público— la reforma que buscaba hacer de la sociedad un rehén de su política macroeconómica.

En ese contexto, lograr la reforma neoliberal implicaba, pues, destruir el orden constitucional; defenderlo significaba volver a la idea de la república, en la cual se basaba. Ha sido por causa de esa resistencia, a lo largo de casi diez años de un ejecutivo empeñado en la realización del ideario del neoliberalismo —con excepción del interregno de Itamar Franco—,⁷ que la izquierda, a partir de su aprendizaje actual, comienza a revisar su propia historia en el periodo de la transición. Enfrentar a la poderosa coalición que viene sustentando la reforma neoliberal tanto en las luchas prácticas como en la

⁶ Llamada así por Getúlio Vargas, que ocupó el Poder Ejecutivo de Brasil de 1930 a 1945 y de 1951 a 1954. Puede ser caracterizada esquemáticamente como el periodo que vio nacer las bases corporativas del Estado populista brasileño, centradas en la construcción del aparato público, la intervención de Estado y la promulgación de una amplia legislación social, entre otras cosas. [N. del T.]

⁷ Vicepresidente en el gobierno de Fernando Collor de Mello. Asumió la presidencia cuando Collor perdió el juicio de *impeachment* en 1992. [N. del T.]

teoría, ha significado para la izquierda, además de la revaloración del tema republicano y de la cuestión nacional, el percatarse de la importancia de las alianzas, principalmente con el Centro político, con todo lo que éste representa en términos de continuidad de la preservación del papel de la esfera pública como ámbito de promoción del desarrollo y de la protección social. En esa larga transición la izquierda comienza, por fin, a tornarse el actor que nunca fue, sobre todo a medida que al romper con antiguas identidades incorpora la democracia como vía del cambio social y opone a la reforma neoliberal un proyecto de república, cuya marca no puede ser otra que la inclusión de todos los que jamás fueron parte de ella.

